

TEST SIMULACRO AVANZADOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, 28 MARZO DE 2025

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el procedimiento administrativo es correcta?

- a) Está compuesto por actos concatenados, no necesariamente regulados jurídicamente.
- b) Tiene por objeto crear exclusivamente actos ejecutivos de la Administración.
- c) Constituye un cauce formal obligatorio para producir actos válidos y fundados en Derecho.**
- d) Todas las anteriores son correctas.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El procedimiento administrativo es el cauce formal, obligatorio y jurídicamente regulado mediante el cual los órganos administrativos producen actos válidos, eficaces y fundados en Derecho. Así lo recoge la definición doctrinal y se regula expresamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que fija sus bases normativas. Las respuestas a) y b) son incorrectas por incompletas o erróneas.

2. ¿En qué norma se regula con carácter general el procedimiento administrativo común?

- a) En la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
- b) En la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo Común.
- c) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre.**
- d) En el Real Decreto Legislativo 5/2015.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), es la norma que regula el procedimiento administrativo de manera general. La opción a) está derogada, y las opciones b) y d) no se corresponden con el objeto normativo indicado.

3. ¿Qué diferencia existe entre el concepto estricto y el amplio de procedimiento administrativo?

- a) El estricto se refiere a los principios y el amplio a la producción de actos.
- b) El amplio incluye directrices generales y garantías del proceso; el estricto se enfoca en la secuencia de actos para generar actos ejecutivos o declarativos.
- c) Ambos conceptos son sinónimos en la doctrina moderna.
- d) La A y la C son correctas.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El concepto amplio del procedimiento incluye principios, garantías, eficacia y validez del acto, mientras que el concepto estricto se centra en la sucesión de actos administrativos para alcanzar un fin. Así lo recoge la doctrina especializada y se aplica en el marco de la LPACAP.

4. ¿Qué caracteriza esencialmente al procedimiento administrativo respecto de otras formas de actuación?

- a) Que sólo se aplica a nivel estatal.
- b) Que es una sucesión de actos espontáneos de la Administración.
- c) Que está jurídicamente regulado y sirve como cauce obligatorio.
- d) Que siempre requiere la intervención judicial.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El procedimiento administrativo está jurídicamente regulado y constituye un cauce obligatorio para que las Administraciones actúen con eficacia y legalidad, conforme a la Ley 39/2015. Las demás opciones son incorrectas por descripciones imprecisas o erróneas.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) La LPACAP es aplicable a todas las actuaciones de la Administración Pública.
- b) El procedimiento administrativo se utiliza para modificar o extinguir actos administrativos.
- c) La visión "ad extra" de la Administración se vincula al procedimiento administrativo.
- d) El procedimiento administrativo puede incluir actos declarativos y ejecutivos.

Respuesta correcta: a)

Razonamiento: La opción a) es falsa, ya que la LPACAP no se aplica a todos los procedimientos; hay procedimientos especiales excluidos expresamente de su ámbito, o sometidos a normativa sectorial específica. Así lo recoge el artículo 2 de la propia ley.

6. ¿A quién corresponde la competencia exclusiva para regular el procedimiento administrativo común, según el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española?

- a) A las Comunidades Autónomas.
- b) Al Estado, sin perjuicio de las especialidades organizativas de las Comunidades Autónomas.
- c) Al Consejo de Ministros.
- d) La A y la B son correctas.

Respuesta correcta: b) Al Estado, sin perjuicio de las especialidades organizativas de las Comunidades Autónomas.

Razonamiento: El artículo 149.1.18ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común, aunque permite que las CCAA introduzcan especialidades derivadas de su propia organización. Esta base constitucional justifica la publicación de la Ley 39/2015.

7. ¿Qué ley regula el régimen jurídico básico de todas las Administraciones Públicas y el específico de la Administración General del Estado?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- c) Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.
- d) Todas son correctas.

Respuesta correcta: b) Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Razonamiento: La Ley 40/2015 regula el régimen jurídico del sector público, incluyendo tanto la legislación básica aplicable a todas las AAPP como el régimen particular de la AGE. La Ley 39/2015 se ocupa del procedimiento administrativo común.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al Gobierno, según la Ley 40/2015?

- a) El Gobierno es un órgano administrativo subordinado a las Cortes Generales.
- b) **El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria y dirige la Administración.**
- c) El Gobierno se limita a ejecutar actos administrativos individuales.
- d) Ninguna es correcta.

Respuesta correcta: b) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria y dirige la Administración.

Razonamiento: Según el Título IV de la Ley 40/2015, el Gobierno es un órgano político con potestad reglamentaria y dirección de la Administración, lo que lo diferencia de esta última, que se subordina a sus directrices.

9. ¿Qué título de la Ley 39/2015 regula la potestad normativa de las Administraciones Públicas?

- a) Título III.
- b) Título IV.
- c) Título V.
- d) **Título VI.**

Respuesta correcta: d) Título VI.

Razonamiento: El Título VI de la Ley 39/2015 trata de la iniciativa legislativa y la potestad normativa de las Administraciones Públicas, estableciendo las condiciones para que puedan aprobar disposiciones reglamentarias.

10. ¿Cuál es la estructura completa de la Ley 39/2015?

- a) **133 artículos, cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y siete finales.**
- b) 135 artículos, cinco disposiciones adicionales y cuatro transitorias.
- c) 133 artículos y cinco títulos.
- d) La A y la C son correctas.

Respuesta correcta: a) 133 artículos, cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y siete finales.

Razonamiento: La Ley 39/2015 se estructura en siete títulos con un total de 133 artículos, y además contiene cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria única y siete disposiciones finales.

11. ¿Cuál de los siguientes principios del procedimiento administrativo permite a la Administración iniciar de oficio todos los trámites, incluida la instrucción y la práctica de pruebas?

- a) Principio de flexibilidad
- b) Principio de oficialidad**
- c) Principio de congruencia
- d) La A y la B son correctas

Respuesta correcta: b) Principio de oficialidad

Razonamiento: El principio de oficialidad establece que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, lo que incluye los actos de instrucción y la práctica de pruebas. Este principio aparece regulado expresamente en los artículos 74.1, 78.1 y 80.2 de la Ley 39/2015 (antigua Ley 30/1992), y garantiza que la administración actúe por iniciativa propia sin depender de los interesados.

12. ¿Qué principio impide que la Administración agrave la situación inicial del interesado al dictar resolución?

- a) Principio de contradicción
- b) Principio de congruencia**
- c) Principio de transparencia
- d) Todas son incorrectas

Respuesta correcta: b) Principio de congruencia

Razonamiento: Según el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, el principio de congruencia obliga a la Administración a resolver todas las cuestiones planteadas por los interesados, sin que pueda empeorar su situación jurídica inicial. Este principio asegura que la resolución sea coherente con lo solicitado por el ciudadano.

13. ¿Cuál de los siguientes principios se relaciona directamente con el uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos?

- a) Principio de transparencia
- b) Principio de cooficialidad lingüística**
- c) Principio de economía procesal
- d) La A y la C son correctas

Respuesta correcta: b) Principio de cooficialidad lingüística

Razonamiento: El principio de cooficialidad lingüística se encuentra recogido en los artículos 35.d) y 36 de la Ley 39/2015, permitiendo que en los procedimientos se utilicen, además del castellano, las lenguas cooficiales reconocidas por los Estatutos de Autonomía en el ámbito correspondiente. Este principio garantiza el derecho a usar la lengua propia del territorio.

14. ¿Qué principio busca simplificar la tramitación evitando rigideces innecesarias, y está íntimamente ligado a la celeridad?

- a) Principio de transparencia
- b) Principio de unidad
- c) Principio de antiformalismo**
- d) Todas son correctas

Respuesta correcta: c) Principio de antiformalismo

Razonamiento: El principio de antiformalismo se traduce en la simplificación del procedimiento para evitar trabas innecesarias que ralenticen la actuación administrativa. Aunque no esté recogido expresamente en un único artículo, se deriva del conjunto de normas de la Ley 39/2015 que buscan agilidad y eficacia en la tramitación, especialmente los arts. 42.2 y 75.

15. ¿Cuál de los siguientes principios recoge el deber de respeto, deferencia y seguridad jurídica hacia los ciudadanos por parte de la Administración?

- a) Principio de transparencia
- b) Principio de responsabilidad
- c) Principio de respeto y seguridad
- d) La A y la C son correctas

Respuesta correcta: d) La A y la C son correctas

Razonamiento: Tanto el principio de transparencia (arts. 35.a), b), c), g) y h), y 37 y 54) como el de respeto y seguridad (arts. 35.i), 40 y 85) reconocen el trato deferente que deben recibir los ciudadanos, garantizando claridad en la actuación administrativa y un entorno de seguridad jurídica.

Ambos principios están presentes en la Ley 39/2015.

16. ¿Cuál de los siguientes procedimientos queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015?

- a) Procedimientos en materia de tributos y aduanas
- b) Procedimientos sancionadores
- c) Procedimientos organizativos
- d) Procedimientos autorizativos

Respuesta correcta: a) Procedimientos en materia de tributos y aduanas

Razonamiento: La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se aplica a determinadas materias como tributos y aduanas, según lo especificado en el propio texto legal. Este tipo de procedimientos se rigen por su normativa específica (por ejemplo, la Ley General Tributaria). En cambio, los procedimientos sancionadores, organizativos o autorizativos sí se pueden encauzar por el procedimiento común si no existe regulación especial.

17. Señala la afirmación incorrecta en relación con la clasificación doctrinal de los procedimientos administrativos:

- a) Los procedimientos declarativos crean una nueva situación jurídica
- b) Los procedimientos simples persiguen un único objetivo
- c) Los procedimientos complejos pueden perseguir varios intereses
- d) Los procedimientos autorizativos son una modalidad de los constitutivos

Respuesta correcta: a) Los procedimientos declarativos crean una nueva situación jurídica

Razonamiento: La afirmación es incorrecta porque los procedimientos declarativos no crean una nueva situación jurídica, sino que reconocen un derecho preexistente. Los que sí producen una nueva situación jurídica son los procedimientos constitutivos. Esta clasificación proviene de la doctrina, especialmente de Giannini, aunque carece de efectos prácticos relevantes en la aplicación de la Ley 39/2015.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los procedimientos administrativos según su estructura?

- a) Los procedimientos ejecutivos no se consideran procedimiento administrativo
- b) Los procedimientos organizativos no tienen base en la Ley 39/2015
- c) Los procedimientos complejos persiguen únicamente el interés público
- d) Los procedimientos ablatorios son una forma de procedimiento constitutivo

Respuesta correcta: d) Los procedimientos ablatorios son una forma de procedimiento constitutivo

Razonamiento: Los procedimientos ablatorios (también conocidos como expropiatorios), concesionales y autorizativos son modalidades del procedimiento constitutivo, ya que todos ellos producen una nueva situación jurídica. Así lo establece la clasificación doctrinal de Giannini. Las demás afirmaciones son incorrectas o confusas: los procedimientos ejecutivos son plenamente administrativos, los organizativos sí tienen base en la Ley 39/2015, y los complejos no se limitan al interés público.

19. ¿Qué caracteriza a los procedimientos administrativos especiales frente a los comunes?

- a) Son más simples en su tramitación
- b) Se aplican de forma supletoria a todos los ámbitos
- c) Están regulados por la Ley 40/2015
- d) Pueden tener su propia normativa específica

Respuesta correcta: d) Pueden tener su propia normativa específica

Razonamiento: Los procedimientos especiales pueden estar regulados por su propia normativa, que prevalece sobre la Ley 39/2015. Esta última se aplica con carácter subsidiario en caso de no existir regulación específica. Así ocurre, por ejemplo, con los procedimientos en materia de extranjería o seguridad social. No están necesariamente regulados por la Ley 40/2015 (que tiene otro ámbito de aplicación).

20. Señala la opción incorrecta respecto a la clasificación doctrinal de procedimientos administrativos:

- a) Los procedimientos constitutivos pueden ser ablatorios, concesionales o autorizativos
- b) Los procedimientos complejos persiguen más de un interés
- c) Los procedimientos declarativos modifican situaciones jurídicas previas
- d) Los procedimientos sancionadores dependen de la potestad administrativa ejercida

Respuesta correcta: c) Los procedimientos declarativos modifican situaciones jurídicas previas

Razonamiento: Los procedimientos declarativos no modifican, sino que reconocen una situación jurídica ya existente. No generan nuevos efectos, a diferencia de los constitutivos. El resto de las afirmaciones son correctas según la clasificación doctrinal propuesta por Giannini.

21. ¿En qué artículos se regula la fase de iniciación del procedimiento administrativo según la Ley 39/2015?

- a) De los artículos 70 a 78
- b) De los artículos 54 a 69
- c) De los artículos 97 a 105
- d) De los artículos 84 a 94

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: La fase de iniciación se regula en el Capítulo II del Título V, que abarca desde el artículo 54 al 69. Así se establece en la estructura legal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tramitación del procedimiento administrativo común?

- a) La tramitación simplificada se regula en el artículo 96
- b) La ejecución del procedimiento se regula entre los artículos 66 y 76
- c) El procedimiento solo puede iniciarse a solicitud del interesado
- d) Todas son correctas

Respuesta correcta: a)

Razonamiento: El artículo 96 de la Ley 39/2015 regula la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, mientras que la ejecución se regula en los artículos 97 a 105, y el procedimiento también puede iniciarse de oficio (arts. 58 a 65), por lo tanto las opciones b y c son incorrectas.

23. ¿Cuántas secciones componen el Capítulo IV de la Ley 39/2015 sobre la instrucción del procedimiento?

- a) Dos
- b) Cuatro
- c) Cinco
- d) Tres

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El Capítulo IV sobre instrucción del procedimiento se divide en cuatro secciones: disposiciones generales, prueba, informes y participación de los interesados, tal como se establece en los artículos 75 a 83 de la LPACAP.

24. La sección que regula el desistimiento y la renuncia dentro de la finalización del procedimiento se encuentra en los artículos:

- a) 95 a 96
- b) 93 a 94**
- c) 87 a 92
- d) 84 a 86

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El desistimiento y la renuncia están regulados en la Sección 3.ª del Capítulo V, concretamente en los artículos 93 y 94 de la Ley 39/2015.

25. ¿Qué tres fases principales se distinguen en el procedimiento administrativo?

- a) Inicio, tramitación y archivo
- b) Solicitud, evaluación y resolución
- c) Iniciación, instrucción y finalización**
- d) Propuesta, ejecución y publicación

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: el procedimiento administrativo se compone de tres grandes fases: iniciación, instrucción y finalización, todas ellas reguladas en el Título V de la LPACAP.

26. ¿Cuándo podrán adoptarse medidas provisionales en un procedimiento administrativo, según el artículo 56 de la Ley 39/2015?

- a) Únicamente una vez iniciado el procedimiento y siempre a solicitud de parte interesada.
- b) Tanto antes como después de iniciado el procedimiento, de forma motivada y por razones justificadas.**
- c) Solo cuando exista orden judicial que las autorice.
- d) Solo de oficio por parte del órgano instructor.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El artículo 56 de la Ley 39/2015 establece que las medidas provisionales podrán adoptarse tanto antes como después del inicio del procedimiento, siempre de forma motivada, respetando los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Incluso antes de la iniciación, pueden acordarse en casos de urgencia inaplazable para proteger provisionalmente los intereses implicados.

27. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos iniciados de oficio pueden comenzar...

- a) Solo por denuncia de los ciudadanos.
- b) Por orden del Consejo de Ministros exclusivamente.
- c) Por propia iniciativa del órgano competente, orden superior, petición razonada o denuncia.
- d) Únicamente cuando exista petición razonada de otro órgano.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El artículo 58 establece claramente que el procedimiento puede iniciarse de oficio por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia.

28. En relación con el acuerdo de acumulación de procedimientos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 57 de la Ley 39/2015?

- a) Solo puede ser solicitado por los interesados.
- b) El acuerdo de acumulación podrá ser objeto de recurso administrativo.
- c) Solo es posible cuando el procedimiento haya sido iniciado a instancia de parte.
- d) El órgano competente podrá acordarlo de oficio o a instancia de parte, y contra dicho acuerdo no cabrá recurso.

Respuesta correcta: d)

Razonamiento: El artículo 57 establece que el órgano que tramite el procedimiento puede disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, ya sea de oficio o a instancia de parte, y que contra dicho acuerdo no procede recurso alguno.

29. ¿Cuál de los siguientes elementos no es obligatorio en una solicitud de iniciación, según el artículo 66 de la Ley 39/2015?

- a) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.
- b) Dirección de correo electrónico.
- c) Firma del solicitante.
- d) Órgano al que se dirige la solicitud y su código de identificación.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: Según el artículo 66, la dirección de correo electrónico es un dato adicional y opcional, mientras que el resto de los elementos citados (firma, órgano destinatario con su código, y hechos/peticiones) son obligatorios.

30. ¿Qué ocurre si un ciudadano no subsana una solicitud incompleta dentro del plazo otorgado por el artículo 68 de la Ley 39/2015?

- a) Se le impone una sanción leve por incumplimiento.
- b) Se inicia de oficio el procedimiento igualmente.
- c) Se le tendrá por desistido, previa resolución dictada en los términos del artículo 21.
- d) Se le permite un nuevo plazo de 15 días para subsanar.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El artículo 68 establece que, si no se subsana en el plazo de 10 días (prorrogables en ciertos casos), se tendrá al interesado por desistido de su solicitud, mediante una resolución expresa que deberá dictarse conforme al artículo 21.

31. ¿Qué constituye el expediente administrativo según el artículo 70 de la Ley 39/2015?

- a) Un archivo digital con las resoluciones firmadas por el órgano competente.
- b) La recopilación de documentos firmados electrónicamente.
- c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
- d) Solo las diligencias dirigidas a ejecutar la resolución administrativa.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El artículo 70 de la Ley 39/2015 define el expediente administrativo como "el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla". Por tanto, no solo se compone de la ejecución, sino también de los antecedentes.

32. ¿Qué principio debe regir el impulso del procedimiento administrativo, según el artículo 71 de la LPACAP?

- a) El principio de jerarquía normativa.
- b) El principio de celeridad.
- c) El principio de legalidad.
- d) Todas las anteriores son correctas.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El artículo 71 de la Ley 39/2015 establece que el procedimiento debe ser impulsado de oficio y de acuerdo con el principio de celeridad, utilizando medios electrónicos y respetando los principios de transparencia y publicidad. Las demás opciones no son incorrectas en sí, pero no son el principio específico mencionado en dicho artículo.

33. ¿En qué casos puede alterarse el orden riguroso de incoación de expedientes administrativos?

- a) Cuando lo decida el Secretario General.
- b) Cuando el órgano competente lo estime más ágil.
- c) Por orden motivada del titular de la unidad administrativa.
- d) Nunca se puede alterar el orden de incoación.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Según el artículo 71 de la LPACAP, solo podrá alterarse el orden riguroso de incoación de expedientes en asuntos de homogénea naturaleza mediante una orden motivada del titular de la unidad administrativa, dejando constancia de ello.

34. ¿Cuál es el objetivo de la concentración de trámites según el artículo 72 de la LPACAP?

- a) Garantizar el cumplimiento sucesivo de los actos.
- b) Reducir el número de notificaciones electrónicas.
- c) Simplificar el procedimiento, acordando en un solo acto todos los trámites que puedan impulsarse simultáneamente.
- d) Aumentar el control sobre cada trámite administrativo.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El artículo 72 establece que, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

35. Según el artículo 73, ¿cuál es el plazo general para que los interesados cumplan con los trámites que les correspondan?

- a) 5 días desde la notificación.
- b) 10 días hábiles desde la firma del acto.
- c) 10 días naturales desde la notificación, salvo que se establezca otro plazo.
- d) 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo disposición en contrario.

Respuesta correcta: d)

Razonamiento: El artículo 73 de la LPACAP establece que los trámites deben cumplimentarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del acto, salvo que una norma fije un plazo distinto. Esta es la regla general.

36. ¿Cuál de los siguientes actos se realiza de oficio durante la fase de instrucción del procedimiento administrativo?

- a) Aportación de pruebas por los interesados.
- b) Propuesta de resolución por el órgano instructor.
- c) Actos necesarios para la determinación de los hechos, a través de medios electrónicos.
- d) Trámite de audiencia a petición del interesado.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos se realizan de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, según el artículo 75 de la Ley 39/2015. Además, deben hacerse a través de medios electrónicos. Las alegaciones y la audiencia son derechos de los interesados, pero no actos que se realicen automáticamente por la administración.

37. ¿Qué ocurre cuando la Administración no tiene por ciertos los hechos alegados por el interesado?

- a) El procedimiento se archiva hasta que se aclaren los hechos.
- b) El instructor deberá abrir siempre un período extraordinario de prueba.
- c) El instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba entre 10 y 30 días.
- d) Todas son incorrectas.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Según el artículo 78.1 de la Ley 39/2015, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba cuya duración será entre 10 y 30 días. No se archiva ni es obligatorio abrir un período extraordinario.

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los informes en el procedimiento administrativo es correcta?

- a) Todos los informes son preceptivos y vinculantes.
- b) Los informes deben ser emitidos por medios electrónicos.
- c) No es necesario justificar la petición de informes no preceptivos.
- d) El plazo para emitir informes es de 30 días en todos los casos.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El artículo 80 de la Ley 39/2015 establece que los informes serán emitidos por medios electrónicos y deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo 26. Salvo disposición contraria,

serán emitidos en el plazo de 10 días y serán facultativos y no vinculantes. Por tanto, la única afirmación correcta es la opción b).

39. ¿Qué se garantiza a los interesados en el trámite de audiencia según el artículo 82 de la Ley 39/2015?

- a) Un plazo de 5 días para formular alegaciones.
- b) Que el trámite se realizará antes de instruir el procedimiento.
- c) La posibilidad de acceder al expediente y formular alegaciones en un plazo de 10 a 15 días.
- d) Que en ningún caso puedan comparecer representantes legales.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El artículo 82 de la LPACAP establece que el trámite de audiencia se produce una vez instruido el procedimiento, y permite a los interesados o a sus representantes acceder al expediente y presentar alegaciones en un plazo que oscila entre 10 y 15 días. Las opciones a), b) y d) son incorrectas por vulnerar el contenido normativo.

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la información pública en el procedimiento administrativo es incorrecta?

- a) La comparecencia en este trámite no otorga la condición de interesado.
- b) El órgano competente podrá publicar un anuncio en el Diario Oficial correspondiente.
- c) La incomparecencia impide presentar recursos contra la resolución final.
- d) Quienes formulen alegaciones tienen derecho a una respuesta razonada.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 39/2015, la incomparecencia en el trámite de información pública no impide que los interesados interpongan recursos contra la resolución definitiva. Por tanto, la afirmación c) es incorrecta y es la respuesta correcta en esta pregunta.

41. ¿Qué sucede si en un procedimiento iniciado de oficio se adoptan medidas provisionales, pero no se dicta acuerdo de iniciación dentro del plazo legal?

- a) Las medidas se entienden confirmadas automáticamente.

- b) Las medidas deben ratificarse por silencio administrativo.
- c) Las medidas quedarán sin efecto.
- d) Se entenderán prorrogadas por un máximo de 15 días.

Respuesta correcta: c) Las medidas quedarán sin efecto.

Razonamiento: Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, si no se inicia el procedimiento en el plazo de 15 días desde la adopción de las medidas provisionales, o si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso sobre ellas, dichas medidas quedarán automáticamente sin efecto.

42. ¿Cuál de los siguientes trámites NO forma parte del procedimiento administrativo simplificado según el artículo 96 de la Ley 39/2015?

- a) Subsanación de la solicitud presentada.
- b) Dictamen del Consejo de Estado, si es preceptivo.
- c) Información pública.
- d) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento.

Respuesta correcta: c) Información pública.

Razonamiento: La tramitación simplificada del procedimiento, regulada en el artículo 96 de la LPACAP, incluye trámites como la subsanación, alegaciones y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, el trámite de información pública no está contemplado dentro de este tipo de procedimiento, ya que se reserva para procedimientos ordinarios de mayor complejidad.

43. ¿Cuál de los siguientes supuestos pone fin a un procedimiento administrativo?

- a) La solicitud del interesado.
- b) El silencio negativo.
- c) El desistimiento, la renuncia o la declaración de caducidad.
- d) La notificación.

Respuesta correcta: c) El desistimiento, la renuncia o la declaración de caducidad.

Razonamiento: Conforme al artículo 84 de la Ley 39/2015, el procedimiento administrativo puede finalizar por resolución, desistimiento, renuncia al derecho (cuando sea posible legalmente),

declaración de caducidad o imposibilidad material sobrevenida de continuarlo. La notificación o solicitud en sí misma no pone fin al procedimiento.

44. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿cuándo puede declararse la caducidad del procedimiento?

- a) Cuando la Administración estime que han pasado 10 días sin actividad.
- b) Cuando el interesado abandone voluntariamente el procedimiento.
- c) Cuando transcurran 3 meses desde el requerimiento sin respuesta.
- d) Todas son incorrectas.

Respuesta correcta: c) Cuando transcurran 3 meses desde el requerimiento sin respuesta.

Razonamiento: Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, en procedimientos iniciados por solicitud del interesado, si este no realiza las actuaciones necesarias tras un requerimiento de la Administración en un plazo de 3 meses, se producirá la caducidad, procediendo al archivo de las actuaciones.

45. ¿Qué sucede si el interesado se desiste de un procedimiento y existen terceros personados que solicitan continuar con el mismo?

- a) El procedimiento debe reabrirse desde el inicio.
- b) El desistimiento no es válido si hay terceros.
- c) La Administración aceptará el desistimiento, pero continuará el procedimiento si los terceros lo solicitan en 10 días.
- d) El desistimiento afecta a todos los interesados sin excepción.

Respuesta correcta: c) La Administración aceptará el desistimiento, pero continuará el procedimiento si los terceros lo solicitan en 10 días.

Razonamiento: El artículo 94 de la LPACAP indica que si hay terceros personados en el procedimiento y solicitan su continuación en el plazo de 10 días desde la notificación del desistimiento, la Administración podrá seguir tramitando el procedimiento. El desistimiento afecta solo al interesado que lo formule.

46. ¿En qué supuesto podrá prescindirse del trámite de audiencia al interesado, según el artículo 82.4 de la Ley 39/2015?

- a) Cuando el procedimiento haya sido iniciado de oficio.
- b) Cuando la resolución contenga hechos o pruebas distintas a las aportadas por el interesado.
- c) Cuando no figuren ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos ni alegaciones distintas a las del interesado.
- d) En ningún caso puede prescindirse del trámite de audiencia al interesado.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El artículo 82.4 de la Ley 39/2015 establece que podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando en el procedimiento no figuren ni se tengan en cuenta en la resolución hechos ni alegaciones distintas a los aducidos por el interesado. En tal caso, se entiende que no existe riesgo de indefensión y no es necesario el trámite, aunque en general este tiene carácter esencial. La opción d) confunde por su tono absoluto.

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el trámite de audiencia es correcta, según el artículo 82 de la LPACAP?

- a) Siempre debe realizarse con independencia de los hechos y pruebas aportadas.
- b) El plazo para formular alegaciones será de entre 5 y 10 días hábiles.
- c) El expediente se pone de manifiesto antes de redactar la propuesta de resolución.
- d) Todas son incorrectas.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: La Ley 39/2015, en su artículo 82.2, indica que el expediente se pondrá de manifiesto a los interesados una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. La opción b) es incorrecta porque el plazo es entre 10 y 15 días. La opción a) se contradice con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo.

48. ¿Qué carácter tiene el trámite de audiencia desde el punto de vista de la Administración, según la doctrina y jurisprudencia citada?

- a) Es discrecional, ya que puede omitirse por motivos de celeridad.

- b) Es potestativo, dependiendo del tipo de procedimiento.
- c) Es una potestad reglada sujeta a valoración del riesgo de indefensión.
- d) La A y la B son correctas.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Según el artículo 82 LPACAP y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el trámite de audiencia es una potestad reglada, no discrecional. Es decir, la Administración solo puede omitirlo cuando no se cause indefensión. Esto lo convierte en un elemento esencial del procedimiento si se aprecian posibles perjuicios para el interesado. La opción d) busca confundir al mezclar conceptos jurídicos incorrectamente.

49. ¿Qué ocurre si el interesado, dentro del trámite de audiencia, no formula alegaciones ni presenta documentos?

- a) La Administración debe notificar nuevamente el trámite.
- b) Se entiende por cumplido el trámite.
- c) Se suspende el procedimiento hasta que el interesado se pronuncie.
- d) Se desestima automáticamente su solicitud.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: Según el artículo 82.3 de la LPACAP, si el interesado manifiesta expresamente que no realizará alegaciones o simplemente deja transcurrir el plazo sin formularlas, se entenderá por cumplido el trámite de audiencia. Esto permite a la Administración continuar con la tramitación del procedimiento.

50. En el contexto del procedimiento sancionador, ¿qué relevancia adquiere el trámite de audiencia según el Tribunal Constitucional?

- a) Es un trámite formal que puede ser sustituido por informes jurídicos.
- b) Es un trámite obligatorio que no puede omitirse bajo ninguna circunstancia.
- c) Es una garantía fundamental equivalente a la audiencia del proceso penal.
- d) Todas son correctas.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha equiparado las garantías del procedimiento sancionador a las del proceso penal, estableciendo que el trámite de audiencia constituye una garantía esencial para la defensa del interesado (art. 24 CE). Su omisión puede implicar la nulidad del procedimiento si produce indefensión. La opción d) es incorrecta por mezclar respuestas contradictorias.

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define con mayor precisión al acto administrativo?

- a) Todo hecho humano realizado por la Administración.
- b) Cualquier decisión adoptada por el Gobierno, aunque no produzca efectos jurídicos.
- c) Una manifestación de voluntad de una Administración Pública que produce efectos jurídicos.
- d) Cualquier resolución judicial sobre la actuación administrativa.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: El acto administrativo es una manifestación de voluntad de la Administración Pública que produce efectos jurídicos de forma directa, en virtud de la posición jurídica especial que ostenta la Administración. La definición queda enmarcada dentro de la LPACAP y se caracteriza por su ejecutividad, fiscalización judicial y sometimiento al principio de legalidad, conforme a los artículos 38, 39, 88, 98 y 99 de la Ley 39/2015.

52. En relación con la ejecutividad del acto administrativo, señale la opción incorrecta:

- a) La ejecutividad implica que el acto puede imponerse incluso contra la voluntad del administrado.
- b) Los actos administrativos requieren autorización judicial para su ejecución.
- c) La autotutela ejecutiva permite a la Administración ejecutar sus actos sin intervención judicial.
- d) El artículo 98 LPACAP reconoce la ejecutividad de los actos administrativos.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: Los actos administrativos no requieren autorización judicial para ser ejecutados, salvo excepciones expresas establecidas en la Constitución o en la ley (art. 99 LPACAP). La autotutela

ejecutiva es una manifestación del poder público que permite a la Administración imponer sus actos sin necesidad de acudir a los tribunales, lo cual refuerza su ejecutividad.

53. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica propia del acto administrativo?

- a) Es una manifestación de voluntad de una Administración Pública.
- b) Tiene efectos jurídicos.
- c) No es revisable por los tribunales de justicia.
- d) Está sometido a los principios de legalidad y servicio al interés general.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Los actos administrativos sí son revisables por los tribunales contencioso-administrativos, de acuerdo con el artículo 106 CE y con lo establecido en la LPACAP. La fiscalización judicial es una de sus principales características, lo que garantiza el respeto al principio de legalidad.

54. ¿Cuál de los siguientes no se considera un acto administrativo según la doctrina?

- a) Una resolución que pone fin a un procedimiento sancionador.
- b) Un reglamento dictado por una Administración.
- c) Una autorización administrativa para la apertura de un local.
- d) Una sanción administrativa por infracción urbanística.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El reglamento es una norma jurídica de carácter general y no un acto administrativo. Aunque emana de la Administración, se distingue por su vocación de generalidad, su carácter normativo y su capacidad de generar efectos jurídicos para un número indeterminado de personas. No es una decisión singular como lo es el acto administrativo.

55. Señale la afirmación correcta respecto a los actos administrativos presuntos:

- a) Se configuran por una resolución expresa no notificada.
- b) Se identifican con el silencio administrativo, siendo siempre negativos.
- c) Son una figura ficticia que solo permite interponer recurso.

- d) Son el resultado de la falta de resolución expresa en plazo y pueden producir efectos jurídicos.

Respuesta correcta: d)

Razonamiento: Los actos administrativos presuntos son aquellos que se entienden dictados por la Administración debido a la inactividad de esta dentro del plazo legal, conforme a lo previsto en la LPACAP. Pueden ser positivos o negativos, y en el caso del silencio positivo, producen un verdadero acto administrativo con efectos jurídicos (art. 24 LPACAP).

56. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, los actos administrativos deberán publicarse:

- a) Únicamente cuando tengan por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
b) Siempre que lo dispongan las normas reguladoras del procedimiento o lo aconsejen razones de interés público.
c) Solo cuando se trate de actos de procedimiento sancionador.
d) La A y C son correctas.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: El artículo 45 de la LPACAP establece que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas del procedimiento o lo aconsejen razones de interés público. Esta publicación se hace en el diario oficial correspondiente, garantizando el principio de publicidad.

57. ¿Cuál de los siguientes requisitos es necesario para que la publicación de un acto administrativo surta efectos jurídicos según la Ley 39/2015?

- a) Publicación dentro del plazo de 30 días desde la firma del acto.
b) Debe incluir únicamente el nombre del interesado y el órgano que dicta la resolución.
c) Debe contener el texto íntegro de la resolución, recursos procedentes, órgano ante el que interponerlos y plazos.
d) Basta con indicar el resultado de la resolución sin necesidad de mencionar recursos.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Conforme al artículo 45.2 de la LPACAP, para que la publicación surta efectos jurídicos debe contener el texto íntegro del acto, indicar si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes y el plazo para interponerlos. De lo contrario, se tendrá por realizado el trámite solo si el interesado actúa con conocimiento de su contenido.

58. ¿Qué se entiende por “publicación somera” de un acto administrativo según el artículo 46 de la LPACAP?

- a) La publicación que carece de efectos jurídicos pero sirve de información general.
- b) Una publicación limitada al nombre del órgano emisor del acto.
- c) Una breve referencia del contenido del acto y el lugar donde los interesados podrán conocerlo íntegramente.
- d) Todas son incorrectas.

Respuesta correcta: c)

Razonamiento: Según el artículo 46 LPACAP, cuando la publicación del acto pueda lesionar derechos o intereses legítimos, se publicará una indicación somera del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer para su conocimiento. Esto protege especialmente datos personales y derechos fundamentales.

59. ¿Cómo deben publicarse los datos personales en un acto administrativo según la D.A. 7.ª de la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018)?

- a) Siempre completos, para garantizar la identificación.
- b) Nombre y apellidos con cuatro cifras aleatorias del documento identificativo.
- c) Solo el número completo del DNI.
- d) Nombre, apellidos y número completo del DNI simultáneamente.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: La disposición adicional séptima de la LOPDGDD establece que, para garantizar la protección de datos personales, la publicación de actos que incluyan datos identificativos debe hacerse mediante el nombre y apellidos junto a cuatro cifras aleatorias del documento identificativo, salvo en casos específicos como notificaciones por anuncio.

60. ¿Cuál de los siguientes supuestos obliga a la publicación de un acto administrativo, según el artículo 45 de la LPACAP?

- a) Cuando se notifica a un solo interesado y se considera suficiente.
- b) Cuando el acto forma parte de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.**
- c) Cuando se trate de una resolución judicial firme.
- d) La A y C son correctas.

Respuesta correcta: b)

Razonamiento: La publicación es obligatoria cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva (art. 45.1.b LPACAP), garantizando la igualdad, publicidad y transparencia. Además, debe indicarse el medio donde se harán las sucesivas publicaciones.

61. Según el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, los plazos establecidos por horas deben entenderse referidos a:

- a) Horas naturales, salvo que se indique lo contrario.
- b) Horas hábiles, siempre que sean menos de 24.**
- c) Horas naturales, cuando el plazo supere las 24 horas.
- d) Horas hábiles únicamente los días laborables, sin excepción.

Respuesta correcta: b).

Razonamiento: El artículo 30.1 de la Ley 39/2015 establece que los plazos señalados por horas se entienden referidos a horas hábiles y que se considerarán hábiles todas las horas de un día hábil. Además, se indica que estos plazos siempre deben ser inferiores a 24 horas; si son iguales o superiores, el cómputo se hará por días.

62. En los plazos señalados por días, si el último día del plazo es inhábil, ¿cuándo concluye el plazo?

- a) El día anterior, si este fuera hábil.
- b) El primer día hábil siguiente.**
- c) El mismo día hábil de la semana siguiente.

- d) El día que el interesado considere más conveniente.

Respuesta correcta: b).

Razonamiento: El artículo 30.5 de la Ley 39/2015 dispone que, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, lo cual evita la indefensión del interesado y garantiza el derecho a una tramitación efectiva.

63. Según el artículo 30.6 de la Ley 39/2015, si un día es hábil en el lugar de residencia del interesado pero inhábil en la sede del órgano administrativo:

- a) Se considerará hábil, y el plazo continúa corriendo.
b) Se considerará hábil solo si el interesado presenta su escrito electrónicamente.
c) Se considerará inhábil en todo caso.
d) El interesado deberá solicitar una aclaración administrativa.

Respuesta correcta: c).

Razonamiento: El artículo 30.6 establece que cuando un día sea hábil en un municipio y al mismo tiempo inhábil en otro (ya sea el de residencia del interesado o el de la sede administrativa), se considerará inhábil en todo caso, aplicando el criterio más garantista para el ciudadano.

64. Respecto a los registros electrónicos, ¿cuál es el único calendario que se aplica para el cómputo de plazos?

- a) El calendario laboral del interesado.
b) El calendario laboral general del Estado.
c) El calendario de la sede electrónica del órgano administrativo.
d) El calendario de la oficina de asistencia en materia de registros.

Respuesta correcta: c).

Razonamiento: El artículo 31.3 de la Ley 39/2015 establece que el calendario de la sede electrónica del órgano administrativo será el único aplicable para el cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que sea aplicable el régimen previsto en el artículo 30.6.

65. ¿Cómo se computa un plazo de un mes a efectos administrativos según la Ley 39/2015?

- a) Desde el mismo día de la notificación hasta el mismo día del mes siguiente.
- b) Desde el día siguiente a la notificación hasta el día anterior al equivalente del mes siguiente.
- c) Desde el día siguiente a la notificación hasta el mismo día del mes siguiente.
- d) Desde el mismo día de la notificación hasta el día anterior del mes siguiente.

Respuesta correcta: b).

Razonamiento: El artículo 30.3 de la Ley 39/2015 dispone que los plazos por meses se computan "de fecha a fecha", iniciándose el plazo al día siguiente de la notificación y finalizando el día anterior al mismo ordinal del mes siguiente, salvo que este fuera inhábil, en cuyo caso se prorroga al siguiente hábil.

66. ¿Cuál de los siguientes actos administrativos requiere dictamen previo y favorable del Consejo de Estado para poder ser declarado nulo de pleno derecho mediante revisión de oficio?

- a) Un acto dictado por órgano jerárquicamente incompetente.
- b) Un acto lesivo al interés público, pero no constitutivo de infracción penal.
- c) Un acto que infringe un derecho fundamental del artículo 24 CE.
- d) Un acto que carece totalmente del procedimiento legalmente establecido.

Respuesta correcta: d) Un acto que carece totalmente del procedimiento legalmente establecido.

Razonamiento: Según el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, los actos que prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1.e LPACAP) son nulos de pleno derecho y requieren dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico para ser anulados por revisión de oficio. Este dictamen es vinculante si es desfavorable. En cambio, la incompetencia jerárquica solo genera anulabilidad (art. 47.1.b, matizado por jurisprudencia).

67. Según la Ley 39/2015, ¿qué órgano es competente para declarar la lesividad de un acto administrativo?

- a) Cualquier funcionario con rango de jefe de servicio.
- b) El Consejo de Estado, con carácter vinculante.

- c) El órgano que dictó el acto, previa autorización del órgano competente según la ley.
- d) El órgano competente según la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Respuesta correcta: c) El órgano que dictó el acto, previa autorización del órgano competente según la ley.

Razonamiento: El artículo 107 LPACAP establece que la declaración de lesividad corresponde al órgano competente de cada Administración conforme a su normativa, lo que implica que no cualquier órgano ni el Consejo de Estado puede declarar la lesividad por sí solo. Además, la impugnación posterior debe hacerse ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 43 LJCA).

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la revocación de actos administrativos no declarativos de derechos?

- a) Solo puede hacerse si existe una sentencia firme que así lo ordene.
- b) Puede hacerse en cualquier momento, incluso si ha transcurrido el plazo de prescripción.
- c) Está permitida si no se causa perjuicio a terceros y no vulnera el principio de igualdad.
- d) No requiere motivación expresa ni comprobación de legalidad previa.

Respuesta correcta: c) Está permitida si no se causa perjuicio a terceros y no vulnera el principio de igualdad.

Razonamiento: El artículo 109.1 LPACAP autoriza a las Administraciones a revocar actos de gravamen o desfavorables siempre que no se vulnere el principio de igualdad, ni el interés público ni el ordenamiento jurídico. Debe realizarse dentro del plazo de prescripción, y con carácter general, no debe generar ventajas indebidas ni discriminación.

69. ¿Qué efecto tiene la suspensión de la eficacia del acto administrativo en el marco de un procedimiento de revisión de oficio?

- a) Equivale a su anulación automática.
- b) Impide que el acto produzca efectos mientras se resuelve el procedimiento.
- c) Solo puede ser acordada por el Consejo de Estado.
- d) Es obligatoria si el acto contiene defectos de forma.

Respuesta correcta: b) Impide que el acto produzca efectos mientras se resuelve el procedimiento.

Razonamiento: El artículo 108 LPACAP permite suspender la ejecución del acto si ésta puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Esta suspensión es una medida cautelar que no equivale a la anulación del acto, pero impide que despliegue efectos mientras se revisa su legalidad.

70. ¿Qué requisito se exige para que proceda la rectificación de un error material en un acto administrativo?

- a) Que exista previa resolución judicial que declare el error.
- b) Que el error haya sido provocado por el administrado.
- c) Que no implique una nueva valoración jurídica ni cambie el sentido del acto.
- d) Que el acto no haya sido notificado aún al interesado.

Respuesta correcta: c) Que no implique una nueva valoración jurídica ni cambie el sentido del acto.

Razonamiento: El artículo 109.2 LPACAP regula que las Administraciones pueden rectificar errores materiales, de hecho, o aritméticos en cualquier momento, pero siempre que dicha rectificación no suponga una modificación sustancial del acto, ni una nueva calificación jurídica o cambio en su contenido esencial.

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho es correcta?

- a) Siempre requiere informe del Consejo de Estado, sea favorable o no.
- b) El dictamen del órgano consultivo es vinculante únicamente si es favorable.
- c) Puede realizarse sin dictamen previo si no se causa perjuicio al interesado.
- d) El informe del órgano consultivo es necesario, pero nunca vinculante.

Respuesta correcta: b) El dictamen del órgano consultivo es vinculante únicamente si es favorable.

Razonamiento: Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, para declarar la nulidad de pleno derecho en la revisión de oficio es necesario el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, siendo vinculante solo si es favorable. Si es desfavorable, la Administración no puede declarar la nulidad.

72. ¿Cuál de las siguientes causas de nulidad de pleno derecho NO se recoge expresamente en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015?

- a) Lesión de derechos fundamentales susceptibles de amparo.
- b) Dictarse el acto sin la firma del titular del órgano.
- c) Incompetencia manifiesta por razón de la materia.
- d) Prescindir total y absolutamente del procedimiento legal.

Respuesta correcta: b) Dictarse el acto sin la firma del titular del órgano.

Razonamiento: El artículo 47.1 LPACAP recoge causas como la lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, actos dictados como consecuencia de delito o prescindiendo totalmente del procedimiento. La falta de firma podría ser un vicio de forma, pero no conlleva nulidad de pleno derecho, salvo que derive en una de esas causas.

73. ¿Qué tipo de actos requieren declaración de lesividad previa para poder ser anulados por la Administración?

- a) Actos de gravamen.
- b) Actos presuntos.
- c) Actos favorables no firmes.
- d) Actos declarativos de derechos firmes.

Respuesta correcta: d) Actos declarativos de derechos firmes.

Razonamiento: El artículo 107 de la Ley 39/2015 exige declaración de lesividad como paso previo para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa aquellos actos declarativos de derechos firmes, en aras de preservar la seguridad jurídica y la posición del administrado.

74. ¿Cuál es el plazo para revocar un acto de gravamen por parte de la Administración según la Ley 39/2015?

- a) Un año desde su notificación.
- b) Cuatro años desde su publicación.
- c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
- d) En cualquier momento, si no causa indefensión.

Respuesta correcta: c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Razonamiento: El artículo 109.1 LPACAP permite la revocación de actos de gravamen mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que dicha revocación no implique una dispensa o exención contraria al ordenamiento.

75. ¿Cuál de los siguientes actos puede rectificarse en cualquier momento por la Administración, incluso de oficio?

- a) Un acto con error en la interpretación jurídica.
- b) Un acto dictado sin competencia jerárquica.
- c) Un acto con error material o aritmético.
- d) Un acto nulo de pleno derecho.

Respuesta correcta: c) Un acto con error material o aritmético.

Razonamiento: El artículo 109.2 de la Ley 39/2015 permite la rectificación en cualquier momento de errores materiales, de hecho, o aritméticos, ya sea de oficio o a instancia del interesado, siempre que no implique una alteración del contenido del acto.

76. ¿Qué tipo de recurso contencioso-administrativo se interpone cuando la cuantía de la demanda no supera los 13.000 euros?

- a) Recurso contencioso-administrativo ordinario
- b) Recurso contencioso-administrativo de urgencia
- c) Recurso contencioso-administrativo abreviado
- d) Recurso contencioso-administrativo excepcional

Respuesta correcta: c) Recurso contencioso-administrativo abreviado

Razonamiento: Este recurso especial está previsto para asuntos cuya cuantía no exceda los 13.000 euros, así como en otras materias específicas como el asilo o la disciplina deportiva. Se trata de un procedimiento previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que busca una tramitación más ágil.

77. ¿Qué tipo de recurso contencioso-administrativo tiene por finalidad reclamar el amparo judicial de los derechos y libertades constitucionales?

- a) Recurso contencioso-administrativo especial
- b) Recurso contencioso-administrativo abreviado
- c) Recurso contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales
- d) Recurso de casación ante el Tribunal Constitucional

Respuesta correcta: c) Recurso contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales

Razonamiento: Se encuentra regulado en el artículo 53.2 de la Constitución Española y en los artículos 114 y siguientes de la LJCA. Es un procedimiento especial para proteger los derechos recogidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución y la objeción de conciencia del artículo 30.

78. ¿Cuándo es obligatoria la intervención del procurador en un recurso contencioso-administrativo?

- a) Siempre que la cuantía supere los 6.000 euros
- b) Cuando el recurso se dirige a los Tribunales Superiores de Justicia
- c) Cuando lo establece el acto impugnado
- d) Nunca es obligatoria su intervención

Respuesta correcta: b) Cuando el recurso se dirige a los Tribunales Superiores de Justicia

Razonamiento: La Ley 29/1998 establece que, si el recurso se tramita ante los Tribunales Superiores de Justicia o instancias superiores, la intervención del procurador es preceptiva conforme al artículo 23 de la LJCA. En juzgados de lo contencioso, puede no serlo si así se permite en función del procedimiento.

79. ¿Cuál de las siguientes NO es una posible resolución del recurso contencioso-administrativo?

- a) La desestimación del recurso
- b) La declaración de inadmisibilidad por causa legal
- c) La estimación del recurso
- d) La anulación del procedimiento por silencio administrativo positivo

Respuesta correcta: d) La anulación del procedimiento por silencio administrativo positivo

Razonamiento: El silencio administrativo positivo produce efectos estimatorios en el ámbito administrativo, pero no puede ser una causa directa para que el órgano judicial anule un procedimiento. Las resoluciones judiciales se centran en la legalidad del acto impugnado conforme a la LJCA.

80. ¿Cuál de los siguientes documentos debe incluirse al presentar un recurso contencioso-administrativo?

- a) Justificante de empadronamiento
- b) Copia del acto recurrido y documentos relevantes
- c) Certificación negativa de antecedentes penales
- d) Testimonio del recurso de alzada presentado previamente

Respuesta correcta: b) Copia del acto recurrido y documentos relevantes

Razonamiento: El artículo 45 de la LJCA establece que en la demanda debe acompañarse copia del acto impugnado, además de los documentos en los que se fundamente el recurso. También es necesaria la firma del abogado y, en su caso, del procurador.

81. ¿Cuál de los siguientes recursos contencioso-administrativos está especialmente previsto para la tutela de los derechos fundamentales?

- a) El recurso contencioso-administrativo ordinario
- b) El recurso contencioso-administrativo abreviado
- c) El recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales
- d) El recurso extraordinario de revisión

Respuesta correcta: c) El recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales

Razonamiento: Este recurso está previsto específicamente en el artículo 53.2 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Tiene por objeto la protección judicial de derechos fundamentales como los recogidos en los artículos 14 a 29 CE. Es un procedimiento especial con tramitación preferente y plazos más breves.

82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el recurso contencioso-administrativo abreviado es incorrecta?

- a) Se interpone cuando la cuantía no supera los 13.000 €
- b) Se aplica en conflictos sobre dopaje en el ámbito deportivo
- c) Requiere la intervención obligatoria de procurador
- d) Puede utilizarse en procedimientos de extranjería

Respuesta correcta: c) Requiere la intervención obligatoria de procurador

Razonamiento: En el recurso contencioso-administrativo abreviado no siempre es necesaria la intervención de procurador, especialmente si el procedimiento se sustancia ante órganos unipersonales. La Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa contempla esta modalidad para casos de menor complejidad o cuantía, como los indicados en las otras opciones.

83. ¿Qué ocurre si se interpone un recurso contencioso-administrativo fuera del plazo legal establecido?

- a) Se tiene por inadmitido
- b) Se resuelve con una sanción al recurrente
- c) Se reconduce automáticamente a otro recurso procedente
- d) Se suspende hasta que el juez determine su procedencia

Respuesta correcta: a) Se tiene por inadmitido

Razonamiento: El artículo 69 de la Ley 29/1998 establece que el recurso será inadmitido cuando se interponga fuera del plazo legalmente establecido. La interposición fuera de plazo constituye una causa objetiva de inadmisión, sin entrar a valorar el fondo del asunto.

84. ¿En qué casos es obligatoria la intervención del procurador en el recurso contencioso-administrativo?

- a) En todos los casos ante cualquier juzgado
- b) Solo si la demanda es superior a 6.000 euros
- c) Cuando el recurso se interpone ante los Tribunales Superiores de Justicia
- d) Nunca es obligatoria su intervención

Respuesta correcta: c) Cuando el recurso se interpone ante los Tribunales Superiores de Justicia

Razonamiento: La intervención de procurador es obligatoria en los procedimientos contencioso-administrativos que se tramitan ante órganos colegiados como los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, según establece la Ley 29/1998, salvo en aquellos procedimientos abreviados o de menor cuantía en órganos unipersonales.

85. ¿Cuál de los siguientes sujetos no está legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo?

- a) El Ministerio Fiscal
- b) Una persona jurídica
- c) Un ciudadano afectado directamente por el acto administrativo
- d) Una persona física sin interés legítimo

Respuesta correcta: d) Una persona física sin interés legítimo

Razonamiento: La Ley 29/1998 exige para interponer recurso contencioso-administrativo que el recurrente acredite un interés legítimo. Por tanto, una persona física que no demuestre estar afectada directa o indirectamente por el acto impugnado carece de legitimación activa. La legitimación se encuentra regulada en el artículo 19 de dicha Ley.

86. ¿Qué órgano no forma parte de los posibles destinos para presentar un recurso contencioso-administrativo?

- a) Tribunal Supremo
- b) Tribunal Constitucional
- c) Tribunal Superior de Justicia
- d) Juzgados especializados en lo contencioso-administrativo

Respuesta correcta: b) Tribunal Constitucional

Razonamiento: El recurso contencioso-administrativo se presenta ante órganos jurisdiccionales ordinarios especializados (como los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo). El Tribunal Constitucional no es competente para este

tipo de recurso, ya que solo conoce del recurso de amparo constitucional y otros supuestos regulados en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional.

87. ¿Qué efecto puede tener la estimación del recurso contencioso-administrativo por parte del tribunal?

- a) La inadmisión automática del acto administrativo impugnado
- b) El archivo sin consecuencias del procedimiento
- c) La declaración de procedencia de lo reclamado por el recurrente
- d) La imposición de costas al recurrente en todo caso

Respuesta correcta: c) La declaración de procedencia de lo reclamado por el recurrente

Razonamiento: Cuando el órgano judicial estima un recurso contencioso-administrativo, reconoce la pretensión del demandante, lo que implica que considera que el acto o inactividad administrativa vulneró el ordenamiento jurídico. En consecuencia, se puede ordenar su anulación, modificación o que se actúe conforme a Derecho. Esta consecuencia se encuentra prevista en la Ley 29/1998, artículos 68 y siguientes.

88. ¿Cuál de los siguientes es un supuesto que puede justificar el recurso contencioso-administrativo?

- a) Una queja informal sin resolución administrativa previa
- b) La disconformidad con una ley aprobada por las Cortes Generales
- c) La inactividad material de una administración pública
- d) Una resolución judicial firme de un tribunal penal

Respuesta correcta: c) La inactividad material de una administración pública

Razonamiento: El artículo 29 de la Ley 29/1998 regula expresamente el recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, entendida como la omisión del deber de resolver o actuar cuando así lo exige la normativa. Es un supuesto previsto legalmente, al igual que los actos expresos, presuntos y disposiciones generales.

89. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el recurso contencioso-administrativo no es correcta?

- a) Solo puede interponerse una vez agotada la vía administrativa
- b) Es obligatorio presentar el recurso a través de abogado y procurador en todos los casos**
- c) Permite impugnar actos administrativos firmes
- d) Puede interponerse contra actos de cualquier Administración pública

Respuesta correcta: b) Es obligatorio presentar el recurso a través de abogado y procurador en todos los casos

Razonamiento: La intervención de abogado es necesaria, pero la del procurador solo es obligatoria ante órganos colegiados, como los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo. No es obligatoria ante Juzgados unipersonales, según lo dispuesto en la Ley 29/1998, artículo 23.

90. ¿Qué efecto tiene la presentación de un recurso contencioso-administrativo sobre el acto impugnado?

- a) Produce la suspensión automática del acto
- b) Permite la ejecución forzosa inmediata del acto
- c) El acto impugnado se mantiene salvo que se solicite y acuerde la suspensión**
- d) Supone su nulidad inmediata

Respuesta correcta: c) El acto impugnado se mantiene salvo que se solicite y acuerde la suspensión

Razonamiento: Conforme al artículo 129 de la Ley 29/1998, la interposición del recurso contencioso-administrativo no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado. Solo si el recurrente lo solicita y el órgano judicial lo acuerda, en base a que la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, podrá suspenderse.

91. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo contra una resolución o acto expreso de la Administración?

- a) 30 días desde la notificación
- b) 60 días desde la notificación o publicación**
- c) 6 meses desde la notificación
- d) 3 meses desde la interposición del recurso administrativo

Respuesta correcta: b) 60 días desde la notificación o publicación

Razonamiento: cuando el recurso contencioso-administrativo se interpone contra una resolución o un acto expreso, el plazo es de 60 días desde la notificación o desde que se haya hecho pública la resolución. Así lo recoge también el artículo 46.1 de la LJCA.

92. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo en caso de inactividad de la Administración o silencio administrativo?

- a) 30 días
- b) 2 meses
- c) 6 meses**
- d) 12 meses

Respuesta correcta: c) 6 meses

Razonamiento: En los casos de silencio administrativo o inactividad de la Administración, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo se amplía a 6 meses, conforme a lo indicado en el texto y el artículo 46.1 de la LJCA.

93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración es correcta?

- a) Solo se produce si hay funcionamiento anormal del servicio público
- b) La Administración solo responde si hay culpa o dolo en su actuación
- c) Es una responsabilidad subjetiva basada en la culpa
- d) Basta con que exista un daño efectivo, evaluable e individualizado**

Respuesta correcta: d) Basta con que exista un daño efectivo, evaluable e individualizado

Razonamiento: El régimen de responsabilidad patrimonial es objetivo, lo que significa que no se exige culpa. Basta con que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, como recoge el artículo 32.1 de la Ley 40/2015 y el artículo 106.2 de la Constitución.

94. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración?

- a) Que el daño se produzca por fuerza mayor
- b) Que el daño sea consecuencia directa del funcionamiento del servicio público
- c) Que el daño no sea un perjuicio hipotético
- d) Que el afectado no tenga el deber jurídico de soportar el daño

Respuesta correcta: a) Que el daño se produzca por fuerza mayor

Razonamiento: El daño producido por fuerza mayor excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración, según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015. Por tanto, no es un requisito, sino una causa de exoneración.

95. ¿Cuál es el plazo general para ejercer el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial ante la Administración?

- a) 2 años desde la producción del daño
- b) 1 año desde la producción del daño o desde que pudo conocerse su alcance
- c) 6 meses desde la resolución administrativa
- d) 1 año desde la notificación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma

Respuesta correcta: b) 1 año desde la producción del daño o desde que pudo conocerse su alcance

Razonamiento: El artículo 67 de la Ley 39/2015 establece que el plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial es de un año, ya sea desde que se produjo el daño o desde que pudo determinarse su alcance.

96. ¿Qué requisito adicional exige el artículo 34.1 de la Ley 40/2015 para excluir la indemnización por daños causados por hechos imprevisibles?

- a) Que exista dolo o culpa grave por parte del funcionario
- b) Que el daño sea irreparable
- c) Que no se hubieran podido prever ni evitar con los conocimientos científicos o técnicos existentes
- d) Que el daño sea consecuencia de actos legislativos

Respuesta correcta: c) Que no se hubieran podido prever ni evitar con los conocimientos científicos o técnicos existentes

Razonamiento: El artículo 34.1 de la Ley 40/2015 establece que no serán indemnizables los daños que no pudieran preverse o evitarse según el estado de los conocimientos de la ciencia o técnica existentes al tiempo del daño.

97. ¿En qué supuesto se considera que el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial comienza a contar desde la curación o la determinación de las secuelas?

- a) En daños causados a bienes inmuebles
- b) En daños derivados de una expropiación forzosa
- c) En daños físicos o psíquicos a las personas
- d) En daños producidos por resoluciones administrativas firmes

Respuesta correcta: c) En daños físicos o psíquicos a las personas

Razonamiento: Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, cuando los daños son de carácter físico o psíquico, el cómputo del plazo de 1 año se inicia desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas.

98. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el nexo causal en la responsabilidad patrimonial es correcta?

- a) El daño debe provenir exclusivamente del silencio administrativo
- b) Es suficiente con que el daño coincida en el tiempo con la actuación administrativa
- c) Debe haber relación directa, inmediata y exclusiva entre el daño y el servicio público
- d) Solo es exigible si hay omisión de un procedimiento sancionador

Respuesta correcta: c) Debe haber relación directa, inmediata y exclusiva entre el daño y el servicio público

Razonamiento: Uno de los requisitos fundamentales es la existencia de una relación directa y exclusiva de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio público y el daño, sin que medien elementos extraños.

99. ¿Cuál de los siguientes ejemplos sería considerado un supuesto de antijuridicidad del daño según la LRJSP?

- a) Un impuesto legalmente aprobado
- b) Una sanción administrativa correctamente impuesta
- c) Una expropiación con indemnización
- d) Un perjuicio derivado de un funcionamiento normal del servicio sin deber jurídico de soportarlo

Respuesta correcta: d) Un perjuicio derivado de un funcionamiento normal del servicio sin deber jurídico de soportarlo

Razonamiento: El daño antijurídico es aquel que el particular no tiene el deber jurídico de soportar. Incluso aunque el servicio haya funcionado con normalidad, si genera un daño sin base legal para que el ciudadano lo soporte, es indemnizable.

100. ¿Qué tipo de responsabilidad se configura en el sistema español para la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública?

- a) Subjetiva, basada en la culpa
- b) Solidaria con la responsabilidad civil
- c) Objetiva, basada en el resultado
- d) Directa, pero solo por actos dolosos

Respuesta correcta: c) Objetiva, basada en el resultado

Razonamiento: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es objetiva, conforme al artículo 106.2 CE y el artículo 32 de la Ley 40/2015. No depende de la culpa o el dolo, sino del resultado lesivo derivado del funcionamiento del servicio público.